

REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JURISDICCIONAL DEL PODER PÚBLICO



*“Al servicio de la justicia y de la paz social”*

TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN  
SALA DE DECISIÓN CIVIL

PROCESO	RECURSO DE REVISIÓN
DEMANDANTE	CELSO ANTONIO GÓMEZ GALEANO
DEMANDADOS	MARÍA LUZ NELLY GÓMEZ PULGARÍN
INSTANCIA	PRIMERA-
RADICADO	05001 22 03 000 2022 00232 00
	INTERNO 2022 - 22
PROVIDENCIA	AUTO INTERLOCUTORIO N° 155
TEMAS	CADUCIDAD RECURSO DE REVISIÓN
DECISIÓN	RECHAZA
MAGISTRADA	MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO
PONENTE	

**Medellín, diecinueve (19) de diciembre de dos mil veintidós (2022).**

Presentado el memorial encaminado a cumplir los requisitos exigidos en el auto inadmisorio se procede a decidir sobre la viabilidad de admitir la presente demanda de revisión.

**I. ANTECEDENTES**

Actuando a través de apoderado judicial, el señor Celso Antonio Gómez Galeano promovió recurso extraordinario de revisión frente a la providencia dictada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Itagüi el 16 de junio de 2011.

Mediante providencia del 8 de agosto de 2022, se inadmitió la demanda y se exigió a la parte demandante, entre otros, indicar el día de ejecutoria de la sentencia que se ataca en revisión y aportar actualizado el certificado de tradición y libertad del inmueble objeto del proceso atacado.

En cumplimiento de las anteriores exigencias el apoderado del demandante señaló que la sentencia quedó ejecutoriada el 30 de junio de 2011 y aportó certificado de tradición y libertad correspondiente al inmueble con matrícula

inmobiliaria N° 001-284460, en el que se observa en la anotación N° 05 de fecha 18 de noviembre de 2011, inscripción de la sentencia dictada el 16 de junio de 2011 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Itagüi.

## II. CASO CONCRETO.

El recurso extraordinario de revisión se encuentra regulado en la actualidad en los artículos 354 a 360 del Código General del Proceso, sobre la procedencia de este mecanismo excepcional dispone el artículo 354 ibídem: *“El recurso extraordinario de revisión procede contra las sentencias ejecutoriadas”*; seguidamente, en el artículo 355 se enlistan nueve causales de procedencia las cuales refieren a situaciones irregulares que incidieron en la sentencia; así reseña la norma, entre otras: *“7. Estar el recurrente en alguno de los casos de indebida representación o falta de notificación o emplazamiento, siempre que no haya sido saneada la nulidad”* y, el artículo 356 alude al termino para formular el recurso indicando que:

*“El recurso podrá interponerse dentro de los dos (2) años siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia cuando se invoque alguna de las causales consagradas en los numerales 1, 6, 8 y 9 del artículo precedente.*

***Cuando se alegue la causal prevista en el numeral 7 del mencionado artículo, los dos (2) años comenzarán a correr desde el día en que la parte perjudicada con la sentencia o su representante haya tenido conocimiento de ella, con límite máximo de cinco (5) años. No obstante, cuando la sentencia debe ser inscrita en un registro público, los anteriores términos sólo comenzarán a correr a partir de la fecha de la inscripción...”*** (Resaltado intencional).

La anterior reseña normativa da cuenta clara que el recurso de revisión, cuando se alega falta o indebida notificación o representación, tiene un límite temporal para su formulación de dos (2) años siguientes a que la parte afectada con la sentencia tuvo conocimiento de la misma, sin que se supere el término de cinco (5) años desde la ejecutoria de la sentencia, términos que en los eventos en que la sentencia deba ser inscrita en un registro público, empiezan a correr desde la inscripción correspondiente.

Sobre este tópico se ha pronunciado nuestro máximo órgano de decisión civil, explicando la aplicación imperiosa de dicho término, el que da lugar incluso al rechazo de la demanda; así, en auto AC2465-2022 del 15 de junio del año en curso y aludiendo a otras providencias anteriores, explicó la Corte Suprema de Justicia:

*“El artículo 355 del Código General del Proceso consagra los motivos de revisión de las sentencias en firme, el séptimo de los cuales consiste en «[e]star el recurrente en alguno de los casos de indebida representación o falta de notificación o emplazamiento, siempre que no haya sido saneada la nulidad».*

*Por su parte el 356 ibídem, que fija el término para hacer uso de esa vía extraordinaria, señala en su primer inciso respecto de dicha razón que «podrá interponerse dentro de los dos (2) años siguientes a la ejecutoria de la respectiva sentencia...», precisando el siguiente que «[c]uando se alegue la causal prevista en el numeral 7 del mencionado artículo, los dos (2) años comenzarán a correr desde el día en que la parte perjudicada con la sentencia o su representante haya tenido conocimiento de ella, con límite máximo de cinco (5) años. No obstante, cuando la sentencia debe ser inscrita en un registro público, los anteriores términos sólo comenzarán a correr a partir de la fecha de la inscripción».*

*De conformidad con esta disposición, el revisionista cuenta con dos años para formular tempestivamente el recurso, los cuales, en principio, se cuentan desde que tuvo conocimiento de la sentencia, que, en relación con las que son objeto de registro, se presume desde que este se realiza, sin sobrepasar, en todo caso, un lustro a partir de la firmeza del proveído.*

*En tal sentido, en AC3663-2020, la Sala reiteró que*

***“(...) el término para la formulación del recurso extraordinario de revisión, cuando de la causal 7ª se trata, es de dos años y se contabiliza, esencialmente, a partir del enteramiento que la parte tenga de la sentencia emitida, coincida o no con la ejecutoria del fallo o, si se trata de aquellos eventos en que dicho proveído debe ser registrado, el tiempo señalado cuenta desde la fecha del asiento respectivo; en todo caso, no podrán transcurrir más de cinco años desde la firmeza de la decisión respectiva.*** Esta Corporación, refiriéndose al tema evaluado ha expuesto: *En relación con este término ha señalado la Corte que cuando la norma mencionada determina, en los casos en que la sentencia debe ser inscrita en un registro público, que el recurrente dispone de dos años contados a partir de la fecha de registro de la sentencia para impugnarla, ‘...está partiendo de un conocimiento ficto, presunto, que se supone tiene toda persona de una providencia por la sola circunstancia de la publicidad que el registro público implica. Pero, por supuesto que ese conocimiento presunto debe ceder el paso, debe inclinarse ante el conocimiento verdadero, material, que el interesado obtenga de la decisión judicial correspondiente. Así,*

pues, si el interesado llega a tener conocimiento de una sentencia de las sometidas a registro antes de que este se efectúe, los dos años para recurrir en revisión correrán, no desde la fecha del registro, como podría creerse tras una lectura apresurada o superficial de la norma, sino a partir de ese conocimiento real y efectivo de la providencia; y es esta la interpretación racional de la disposición estudiada, pues lo pretendido por la ley es que la revisión se intente dentro de los dos años siguientes al conocimiento que el presunto agraviado tenga de la decisión que le perjudica, de tal manera que, una vez enterado en forma cierta de ella, le corren inexorables los dos años; con el agregado sí, de que cuando la sentencia ha sido registrada, no puede el recurrente alegar que su conocimiento devino con posterioridad a la fecha del registro, por cuanto en tal evento, el cómputo del término respectivo arranca necesariamente desde el conocimiento presuntivo que suministra el registro de la sentencia'. (Auto de 2 de agosto de 1995 citado en auto 014 de 1º. de febrero de 1999). Respecto a la contabilización de los términos la Corte, en el auto indicado precisó: '...como sucede en las demás causales, también en la séptima el término para recurrir es de dos años; la diferencia estriba, entonces, es en el momento en que esos dos años comienzan a correr, porque no será a partir de la ejecutoria de la sentencia, de conformidad con la regla general, sino que se contarán, ya a partir de cuando la parte perjudicada o su representante haya tenido conocimiento de la decisión, ora a partir de la fecha de registro, si la sentencia es de aquellas que deben inscribirse en un registro público; pero para deducir la oportunidad de la impugnación extraordinaria, no basta con tener en cuenta aquellos términos, sino también el plazo máximo fijado en la misma ley, que no puede ser superior a los cinco años contados desde la ejecutoria de la respectiva sentencia, como así se desprende de una visión integral del artículo 381 en comento'. (Auto de 2 de agosto de 1995 citado en auto 243 de 16 de octubre de 1998) – La Corte hace notar- (CSJ SR 16 de julio de 2001, Exp. n° 7403). (Subrayas del original).

**Cabe agregar que dicho plazo es improrrogable y su fenecimiento es constitutivo de caducidad declarable de oficio, máxime cuando el tercer inciso del artículo 358 ejusdem ordena que sin «más trámite, la demanda será rechazada cuando no se presente en el término legal».**

Al respecto, en el proveído acabado de memorar se sostuvo que

**Esos plazos fijados por el legislador son perentorios e improrrogables, y comportan preclusión de la oportunidad para formular esta excepcional impugnación; es decir, sobreviene forzoso el decaimiento de la facultad legal que tiene la parte para incoar la revisión. En otras palabras, se produce la caducidad, cuya existencia debe declarar el juez, aún de oficio, por disposición del artículo 383, numeral 4, del actual Estatuto Procesal Civil" (CSJ CS, 11 jul. 2013, Rad. 2011-01067, reiterada en SC18031-2016, 12 dic. 2016, Rad. 2013-01021-00) (Resaltado intencional).**

Revisado el asunto puesto a consideración de este Despacho se evidencia que el término para formular la demanda de revisión se encuentra completamente fenecido, en tanto, la sentencia atacada quedó en firme hace más de diez (10)

años (30 de junio de 2011) y, desde la inscripción de ésta en el certificado de tradición y libertad del inmueble objeto de litigio (18 de noviembre de 2011) ha transcurrido un término similar, habiéndose superado con creces el plazo máximo de cinco (5) años para acudir al recurso extraordinario de revisión, procediendo entonces el rechazo de la presente demanda.

Por lo expuesto, **la suscrita Magistrada Sustanciadora de la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín,**

### **RESUELVE**

**RECHAZAR** la demanda que en ejercicio del recurso de revisión formuló **CELSO ANTONIO GÓMEZ GALEANO.**

### **NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**MARTHA CECILIA OSPINA PATIÑO**

**Magistrada**

*(Firma electrónica conforme el artículo 105 del Código General del Proceso, en concordancia con las disposiciones de la Ley 2213 de 2022)*

**Firmado Por:**

**Martha Cecilia Ospina Patiño**

**Magistrado Tribunal O Consejo Seccional**

**Sala 007 Civil**

**Tribunal Superior De Medellin - Antioquia**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **c125aa7a5f60bcb9b75c891793b2de9fd565f3d1b9f7c3fac36462332d9eb2d6**

Documento generado en 19/12/2022 03:51:31 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**